

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL: San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.

El presente procedimiento administrativo sancionador se tramita contra los señores **Marco Julio Iraheta Hernández**, **Loyda Marielos Alfaro Chávez** y **Tania Patricia Chávez López**, Miembros de la Comisión de Servicio Civil (CSC) del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU), a quienes se atribuye la posible infracción de la prohibición ética de *“Retardar sin motivo legal (...) procedimientos administrativos, que le corresponden según sus funciones”*, regulada en el art. 6 letra i) de la Ley de Ética Gubernamental (en lo sucesivo LEG).

Considerandos:

I. Relación de los hechos.

1. En la denuncia presentada el día trece de abril de dos mil quince por el [redacted], por medio de su apoderado general judicial, abogado Amílcar Efrén Cardona Monterrosa, expuso en síntesis que el día treinta de mayo de dos mil trece la CSC del MOPTVDU admitió demanda de despido interpuesta en su contra por el titular de dicho Ministerio, procedimiento que se identificó con referencia 1-DP-2013.

Añadió que el día once de abril de dos mil catorce se efectuó la correspondiente audiencia probatoria sin que a la fecha de presentación de la denuncia en esta sede la Comisión hubiere emitido la resolución final del caso (fs. 1 al 6).

2. Por resolución de las ocho horas y veinticinco minutos del día dos de julio de dos mil quince, se ordenó la investigación preliminar del caso y se requirió informe a la CSC del MOPTVDU respecto del trámite y estado del procedimiento con referencia 1-DP-13 (f. 47).

3. Mediante informe recibido en este Tribunal el día catorce de agosto de dos mil quince, la Presidenta de la CSC del MOPTVDU indicó que el día doce de julio de ese mismo año dicho órgano colegiado declaró ha lugar el despido del [redacted] (f. 50).

4. Por resolución de las ocho horas y veinticinco minutos del día veintiséis de octubre de dos mil quince, se decretó la apertura del procedimiento administrativo sancionador contra los servidores públicos denunciados y se les concedió el plazo de cinco días hábiles para que ejercieran su derecho de defensa (f. 88).

5. Con los escritos presentados los días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil quince, los investigados ejercieron su derecho de defensa y agregaron documentación (fs. 94 al 137).

Como argumentos de defensa, manifestaron, en síntesis:

La señora Chávez López expresó que: a) después de celebrar la audiencia probatoria del caso cuyo retardo aduce el denunciante, efectuada el día once de abril de dos mil catorce y de sostener diversas conversaciones con los licenciados Alfaro Chávez e Iraheta

Hernández, la decisión sobre dicho procedimiento tuvo “(...) una serie de atrasos y complejidades por la falta de asistencia del licenciado Marco Julio Iraheta Hernández a las reuniones, pues éste se excusaba para poder reunirse en comisión (...)” [sic]; b) la licenciada Alfaro Chévez y su persona elaboraron un proyecto de acumulación del caso contra el señor [redacted] con el de otro empleado, por existir vinculación fáctica entre ambos, el cual se envió mediante correo electrónico institucional al licenciado Iraheta Hernández el día dieciséis de mayo de dos mil catorce; y en conversaciones para dar seguimiento a dicho proyecto de resolución ese licenciado manifestó estar en desacuerdo con el mismo, comprometiéndose en reiteradas ocasiones a modificarlo para discutirlo en la comisión; sin embargo, fue hasta el día veintisiete de julio de dos mil quince que dicho señor remitió mediante correo electrónico dos proyectos de sentencia; c) entre el dieciséis de mayo de dos mil catorce y el veintisiete de julio de dos mil quince su persona solicitó, tanto personalmente como vía correo electrónico institucional, que el licenciado Iraheta Hernández se pronunciara sobre los casos relacionados; y d) no transgredió la prohibición ética regulada en el artículo 6 letra i) de la LEG porque en todo momento atendió los plazos legales para que la comisión que integra emitiese la resolución final en el aludido procedimiento contra el señor [redacted]

[redacted], y tanto la licenciada Loyda Alfaro como su persona cumplieron con sus obligaciones como miembros del referido cuerpo colegiado, considerando además sus funciones de empleadas del MOPTVDU.

Por su parte el licenciado Iraheta Hernández, por medio de su apoderado general judicial, licenciado Manuel Ernesto Flores Molina, indicó que: a) el licenciado Amílcar Efrén Cardona Monterrosa perjudicó en parte la celeridad del trámite del proceso contra el señor [redacted], en razón que el primero solicitó en varias ocasiones la reprogramación de la audiencia probatoria; b) la carga de trabajo de los miembros de la CSC del MOPTVDU “es bastante grande”, y si bien legalmente dichas tareas se consideran inherentes a sus cargos, realmente éstas son trabajo extra a las funciones ordinarias de los miembros de dicha comisión en la aludida institución, lo cual “(...) influye directamente en el tiempo en que se tramitan los procesos (...); de ahí que una reprogramación de una audiencia no solo afecta el resto de actividades de la Comisión, sino que afecta las actividades que ordinariamente (...) atienden en la institución” [sic]; c) el atraso en el señalamiento de fecha y hora para celebrar la audiencia probatoria del referido caso se encuentra justificado, y en el caso de su persona la justificación “es mayor”, pues ejerce el cargo de Gerente Legal del MOPTVDU y es apoderado general judicial de ese ministerio, de manera que sólo la carga de trabajo en la gerencia relacionada “(...) le absorbe (...) bastante tiempo (...); d) la dilación del procedimiento indicado se debió a la carga de trabajo de los miembros de la mencionada Comisión; e) la referida Comisión “(...) tardó en ponerse de acuerdo para dictar la sentencia (...)” [sic].

Asimismo, la licenciada Alfaro Chévez manifestó que: a) en el procedimiento referencia 1-DP-13 acaecieron circunstancias que justificaron su prolongación, como la presentación de varias solicitudes de reprogramación de la audiencia de prueba por parte de los intervinientes, así como la falta de un criterio definido –entre los miembros de la comisión que integra–, para adoptar la decisión de ese caso, dada su complejidad, la numerosa prueba documental incorporada al mismo y su posible conexión fáctica con otro caso sometido a conocimiento de la referida comisión; b) la carga laboral de cada uno de los integrantes de ese cuerpo colegiado dificulta que sesionen de manera permanente, de ahí que se programen en consenso las sesiones según los tiempos disponibles para ello; c) no se actuó con dolo o negligencia en el procedimiento relacionado, en razón de que éste se estudió en diversas ocasiones, fue resuelto y no se realizaron acciones encaminadas a retardar o entorpecer su curso ordinario.

6. Con el escrito presentado el día veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el licenciado Marco Julio Iraheta Hernández solicitó se le concedieran cuatro días adicionales para ampliar sus argumentos de defensa, por encontrarse fuera del país durante el plazo otorgado para ese efecto (fs. 138 al 141).

7. En la resolución de las quince horas del día treinta de junio de dos mil dieciséis, se declaró sin lugar la ampliación del plazo para la contestación de la denuncia solicitada por el licenciado Marco Julio Iraheta Hernández, se autorizó la intervención del abogado Manuel Ernesto Flores Molina como apoderado general judicial del referido servidor público, se abrió a pruebas el procedimiento por el término de veinte días hábiles y se requirió informe a la CSC del MOPTVDU (f. 142).

8. Mediante informe recibido el día veintidós de agosto de dos mil dieciséis, la aludida comisión respondió el requerimiento formulado (fs. 149 al 217).

9. Con el escrito presentado en esta sede el día cinco de septiembre de dos mil dieciséis, el licenciado Iraheta Hernández, mediante su apoderado general judicial licenciado Flores Molina, reiteró sus argumentos de defensa e incorporó prueba documental (fs. 218 al 273).

10. Por resolución de las ocho horas del día treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se requirió al Gerente de Recursos Humanos Institucional del MOPTVDU que informara si el licenciado Manuel Ernesto Flores Molina, apoderado general judicial del señor Iraheta Hernández, labora en dicho Ministerio, la fecha de su ingreso al mismo, la modalidad de su nombramiento o contratación, las funciones que realiza y el nombre de su jefe inmediato.

Asimismo, se concedió a los intervinientes el plazo de tres días para que presentaran las alegaciones que estimaran pertinentes (f. 274).

11. Mediante el informe referencia MOP-GDTH-UDA-633-07-2017 el Gerente de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional del MOPTVDU indicó que el

licenciado Flores Molina labora en esa institución desde el año dos mil uno como Colaborador del Área Jurídica, siendo su jefa inmediata la señora Teshalia Yesenia García Jiménez, “Coordinadora Jurídico”. Adicionalmente, detalló las funciones de dicho señor (fs. 280 y 281).

12. Con el escrito presentado el día siete de julio de dos mil diecisiete, la señora Tania Patricia Chávez de López realizó una cronología del trámite del procedimiento 1-DP-2013 y refirió que: a) su persona no difirió, detuvo, entorpeció ni dilató el trámite del procedimiento de despido contra el señor _____, sino que cumplió estrictamente lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Servicio Civil y con apego a la Constitución, garantizando los derechos del aludido señor; y b) el denunciante en el presente caso no ha probado la violación a la prohibición ética regulada en el artículo 6 letra i) de la LEG, sino que lo expresado por éste resulta contradictorio, pues “(...) primero da a entender que ha existido mala fe y negligencia, y luego expresa que el actuar de la Comisión se ha tratado de un error involuntario” [sic], y “(...) ha avalado que en el proceso de despido se siguieron las reglas y plazos establecidos (...)” [sic] en la citada disposición (fs. 282 al 284).

13. Por medio del escrito presentado el día siete de julio de dos mil diecisiete el licenciado Manuel Ernesto Flores Molina renunció a continuar ejerciendo la defensa técnica del licenciado Marco Julio Iraheta Hernández (fs. 285 y 286).

14. Con el escrito presentado el día siete de julio de dos mil diecisiete el licenciado Iraheta Hernández expresó que: a) solicitó al licenciado Flores Molina representarlo en el presente procedimiento como un “favor” por la confianza existente entre ambos, lo cual dicho profesional “(...) realizó sin pago de honorarios o emolumento alguno y en pleno uso de sus funciones de apoyar jurídicamente a las diferentes dependencias del ministerio (...)” [sic]; b) en la resolución de las quince horas del día treinta de junio de dos mil dieciséis este Tribunal no se pronunció sobre su solicitud respecto a que se le autorizara intervenir en el presente procedimiento, por lo que reitera dicha petición; c) la celeridad mostrada inicialmente por la CSC del MOPTVDU en el trámite del procedimiento 1-DP-2013 se vio perjudicada por las diversas solicitudes de reprogramación de audiencia del licenciado Amílcar Efrén Cardona Monterrosa, apoderado del señor _____, d) su carga de trabajo en el MOPTVDU influyó directamente en el plazo del trámite del procedimiento 1-DP-2013, y el atraso en el señalamiento de fecha y hora para realizar la audiencia probatoria en dicho caso se justifica en atención a los diversos cargos que su persona ejerce en la aludida institución; y e) el tiempo transcurrido entre la celebración de la audiencia probatoria en el procedimiento relacionado y la emisión de la sentencia correspondiente se justifica también en la carga laboral de los miembros de la citada comisión y en que ésta tardó en llegar a un acuerdo para dictar esa resolución definitiva (fs. 287 al 289).

15. La licenciada Loyda Marielos Alfaro Chávez no ejerció su derecho de presentar alegaciones.

II. Respecto a la alegación del licenciado Iraheta Hernández, servidor público denunciado, sobre la presunta omisión de este Tribunal de autorizar su intervención en el presente procedimiento, cabe aclarar que la legitimación indica en cada caso quiénes son los verdaderos titulares de la relación material que se intenta dilucidar en el ámbito del procedimiento sancionador.

Así, en las relaciones jurídico-administrativas que se configuran cuando este Tribunal despliega su potestad sancionadora, los servidores públicos investigados intervienen como titulares de la obligación de no transgredir los deberes y prohibiciones éticas regulados en la LEG, es decir, corresponde a ellos la *legitimación pasiva* para actuar en el caso concreto, capacidad que no precisa ser declarada por este ente colegiado, pues es inherente a su posición en el procedimiento.

Consecuentemente, resultaría innecesario y dispendioso “autorizar” la intervención del investigado Iraheta Hernández en el presente procedimiento o exigirle a dicho señor que acredite su capacidad para actuar en el mismo, cuando ésta última se le reconoce desde el inicio del trámite.

En ese sentido, su petición deberá rechazarse.

III. Fundamentos de Derecho.

a) Competencia del Tribunal en materia sancionadora.

1. La ética pública está conformada por un conjunto de principios que orientan a los servidores estatales y los conducen a la realización de actuaciones correctas, honorables e intachables, entre ellas el garantizar que el interés público prevalezca sobre el particular, ya sea el propio del servidor público o el de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Consciente de la importancia que el desempeño ético en la función pública reviste en el Estado de Derecho, el legislador estableció un catálogo de deberes y prohibiciones dirigido no sólo a los servidores estatales, sino también a las personas que manejan o administran bienes y fondos públicos, con el cual se persigue prevenir y erradicar cualquier práctica que atente contra la calidad de la función pública en detrimento de la colectividad.

En ese orden de ideas, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción promueven los principios de debida gestión de los asuntos y bienes públicos, responsabilidad, integridad, rendición de cuentas y transparencia.

Asimismo, destacan la importancia de adoptar medidas preventivas destinadas a crear, mantener y fortalecer las normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas, orientadas a evitar conflictos de intereses y, en términos generales, a prevenir la corrupción.

2. La potestad sancionadora que tiene el Tribunal de Ética Gubernamental en la Función Pública, ha sido habilitado por el artículo 14 de la Constitución, siendo una potestad

jurídicamente limitada por la ley que constituye una de las facetas del poder punitivo del Estado.

Así, de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la LEG, el procedimiento administrativo sancionador competencia de este Tribunal tiene por objeto determinar la existencia de infracciones a los deberes y prohibiciones éticas reguladas en ella, teniendo potestad sancionadora frente a los responsables de las contravenciones cometidas. De esta forma, se pretende combatir y erradicar todas aquellas prácticas que atentan contra la debida gestión de los asuntos públicos y que constituyen actos de corrupción dentro de la Administración Pública.

b) Infracción atribuida.

En el presente procedimiento se atribuye la transgresión a la prohibición ética de “Retardar sin motivo legal (...) procedimientos administrativos, que le corresponden según sus funciones”, regulada en el artículo 6 letra i) de la LEG, a los señores Marco Julio Iraheta Hernández, Loyda Marielos Alfaro Chévez y Tania Patricia Chávez López, Miembros de la CSC del MOPTVDU, por cuanto habrían retardado injustificadamente el procedimiento de despido incoado por ese Ministerio contra el señor [redacted], con referencia 1-DP-2013.

Dicha norma tiene como propósito que los servicios, trámites o procedimientos administrativos se diligencien con celeridad y no sean diferidos, detenidos, entorpecidos o dilatados, salvo que exista una razón o fundamento legal para ello.

El retardo sin motivo legal resulta antagónico a la conducta diligente exigible a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones; pues ellos están obligados a atender sus tareas y actividades en forma responsable y eficiente, conforme a las leyes y reglamentos aplicables.

Ello en razón de que el desempeño de una función pública exige dar respuesta a los intereses generales de la comunidad; los cuales deben ser satisfechos –en sentido jurídico– a la brevedad posible, a través de procedimientos expeditos y eficaces, dentro del marco de la legalidad.

c) Prueba aportada.

En este caso la prueba que ha sido aportada y que será objeto de valoración es la siguiente:

1. Copia simple de demanda de despido contra el señor [redacted], presentada el día veintisiete de mayo de dos mil trece por el MOPTVDU, mediante sus apoderadas generales judiciales con facultades especiales, licenciadas Karen Ivonne Cobar Huevo y Kryssia Paola Meléndez Orellana, ante la CSC de dicho Ministerio (fs. 13 al 16 y 52 al 55).

2. Copias simples de resolución de admisión de la aludida demanda, emitida por la CSC del MOPTVDU a las catorce horas del día treinta de mayo de dos mil trece, en el

procedimiento referencia 1-DP-13 (fs. 21 y 56) y de su respectiva notificación, efectuada el día siete de agosto de dos mil trece (f. 57).

3. Copias simples de escrito de contestación de la citada demanda, presentado el día doce de agosto de dos mil trece por el señor _____, mediante su apoderado general judicial, licenciado Amílcar Efrén Cardona Monterrosa (fs. 23 al 26 y 58 al 61).

4. Copias simples de resolución pronunciada por la CSC del MOPTVDU a las siete horas con cuarenta minutos del día dos de diciembre de dos mil trece, en la cual se abre a pruebas el referido procedimiento y se señala la audiencia probatoria (fs. 27 y 62), así como de su correspondiente notificación (fs. 63 y 64).

5. Copias simples de escrito presentado el día seis de diciembre de dos mil trece por el señor _____, mediante su apoderado general judicial, licenciado Cardona Monterrosa, con el cual el primero solicita se re programe la mencionada audiencia probatoria (fs. 29 y 65).

6. Copias simples de resolución dictada a las ocho horas del día doce de febrero de dos mil catorce por la CSC del MOPTVDU, en la cual se señala la audiencia probatoria del procedimiento 1-DP-13 a las diez horas con treinta minutos del día dieciocho de febrero de dos mil catorce (fs. 31, 32 y 67); y de su respectiva notificación, realizada el día dieciocho de febrero de dos mil catorce (f. 68).

7. Copias simples de resolución dictada a las doce horas del día dieciocho de febrero de dos mil catorce por la CSC del MOPTVDU, en la cual se reprograma la audiencia probatoria del procedimiento 1-DP-13 para las ocho horas con treinta minutos del día veinte del mismo mes y año (f. 69) y de su correspondiente notificación, realizada en la misma fecha (fs. 70 y 71).

8. Copias simples de escrito presentado el día diecinueve de febrero de dos mil catorce por el señor _____, mediante su apoderado general judicial, licenciado Cardona Monterrosa, mediante el cual el primero solicita se re programe la audiencia probatoria indicada en el párrafo anterior (fs. 34 y 72).

9. Copia simple de escrito presentado el día diecinueve de febrero de dos mil catorce por la licenciada Karen Ivonne Cóbar Huezo, apoderada general judicial con facultades especiales del MOPTVDU, con el cual solicita se re programe la audiencia probatoria fijada para el día veinte del mismo mes y año (f. 74 y 75).

10. Copias simples de resolución dictada a las ocho horas del día cuatro de abril de dos mil catorce por la CSC del MOPTVDU, en la cual se reprograma la audiencia probatoria del procedimiento 1-DP-13 para las ocho horas con treinta minutos del día once del mismo mes y año (fs. 36 y 76) y de su correspondiente notificación, realizada en la misma fecha (fs. 77 y 78).

11. Copia simple de acta de audiencia probatoria celebrada por la CSC del MOPTVDU a las diez horas con treinta minutos del día once de abril de dos mil catorce, en el procedimiento referencia 1-DP-13 (fs. 38 al 44).

12. Copia simple de solicitud de certificación del expediente del citado procedimiento, presentada el día siete de abril de dos mil quince por el señor
mediante su apoderado general judicial, licenciado Cardona Monterrosa (f. 46).

13. Copia simple de resolución dictada a las ocho horas del día doce de julio de dos mil quince por la CSC del MOPTVDU, en el procedimiento referencia 1-DP-13, con la cual se declara ha lugar el despido del señor (fs. 79 al 85); y copia de su respectiva notificación, efectuada el día trece de agosto de dos mil quince (fs. 86 y 87).

14. Copia simple de cuadro donde se detalla el trámite brindado por la CSC del MOPTVDU a los procedimientos sometidos a su conocimiento durante el período comprendido entre el veintisiete de mayo de dos mil trece y el trece de agosto de dos mil quince (fs. 153 y 154).

15. Certificación expedida por la Presidenta de la CSC del MOPTVDU del acta de toma de posesión de los señores Marco Julio Iraheta Hernández, Loyda Marielos Alfaro Chávez y Tania Patricia Chávez López como miembros de dicha Comisión, elaborada a las ocho horas del día tres de abril de dos mil catorce (fs. 155 al 159).

16. Impresiones de correos electrónicos suscritos por los señores Iraheta Hernández, Alfaro Chávez y Chávez López, con relación a: a) convocatorias para reuniones de trabajo relativas a la resolución de los procedimientos sometidos a conocimiento de la CSC del MOPTVDU, de fechas veinticinco y veintinueve de mayo, ocho de junio, diez de julio, cinco de septiembre, dos y seis de diciembre, todas las fechas del año dos mil trece (fs. 98, 181 al 186); veinticinco de marzo, uno, tres, seis, ocho y nueve de abril, trece, dieciséis, veintisiete y veintiocho de mayo, once de junio, uno de julio y diez de noviembre, todas esas fechas del año dos mil catorce (fs. 99, 102, 188, 190, 191, 193 al 199, 202 al 205, 207, 209 y 213); b) convocatorias para reuniones de trabajo relativas a la resolución del procedimiento 1-DP-13, de fechas veinticinco de marzo, veintisiete y veintiocho de julio y diez de agosto, todas del año dos mil quince (fs. 104 al 106 y 215 al 217).

17. Informe suscrito por los señores José Danilo Escobar Miranda, Loyda Marielos Alfaro Chávez y Tania Patricia Chávez López, miembros propietarios de la CSC del MOPTVDU, de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, relativo a la carga laboral asignada a esa comisión entre el veintisiete de mayo de dos mil trece y el trece de agosto de dos mil quince, y el trámite brindado a los procedimientos tramitados por dicho órgano colegiado durante el mismo período (fs. 149 y 150).

18. Informes relativos a las funciones desarrolladas por los señores Iraheta Hernández, Alfaro Chávez y Chávez López en el MOPTVDU, entre los años dos mil trece y dos mil quince (fs. 131 al 133, 160 al 164, 178, 179, 220 al 273).

19. Memorando referencia MOP-GDTH-UDA/1057-08-2016 de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por el Gerente de Desarrollo del Talento Humano del MOPTVDU y dirigido a la licenciada Tania Patricia Chávez, mediante el cual el primero informa sobre la inexistencia de personal administrativo asignado de forma temporal o definitiva a la CSC de la referida institución (f. 165).

20. Copias certificadas por el Gerente de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional del MOPTVDU, de los descriptores de los puestos y funciones de Gerente Legal, Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica y Colaborador Jurídico del aludido Ministerio, desempeñados por los señores Marco Julio Iraheta Hernández, Loyda Marielos Alfaro Chávez y Tania Patricia Chávez López, respectivamente (fs. 166 al 177).

21. Copia simple de "Solicitud de Autorización para Contratar y/o nombrar personal" en el MOPTVDU, donde constan las tareas encomendadas al señor Iraheta Hernández como Gerente Legal de la citada institución (f. 126).

22. Copia certificada por notario del acuerdo número seiscientos tres emitido por el Ministro de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano el día veinte de septiembre de dos mil trece, en el cual se nombró al licenciado Iraheta Hernández como Director General de Caminos ad honorem (f. 127).

23. Dos copias, una certificada por el Gerente Administrativo del MOPTVDU y otra simple, de pasajes del Reglamento Interno y de Funcionamiento del MOPTVDU donde constan las funciones de la Gerencia Legal Institucional y de la Unidad de Asesoría Técnica, respectivamente (fs. 125 y 134 al 137).

24. Memorando referencia MOP-GA-1260/08/2016 de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por la Gerente Administrativo Institucional del MOPTVDU y dirigido a los miembros de la CSC de la citada institución, con el cual la primera informa sobre las instalaciones y los recursos asignados a dicha Comisión (f. 180).

Por otra parte, la siguiente prueba no será objeto de valoración por no estar vinculada con el objeto del procedimiento, por no ser idónea o por carecer de utilidad para acreditar los hechos que se dilucidan:

1. Copia simple de acuerdo número trescientos treinta y nueve emitido por el Ministro de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano el día veinticuatro de mayo de dos mil trece, en el cual se ordena la suspensión del señor como trabajador del MOPTVDU e inicio de procedimiento administrativo de despido en su contra (fs. 18 y 19).

2. Copia simple de nota suscrita por la licenciada Tania Chávez y dirigida al Ministro de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano, de fecha trece de octubre de dos mil quince, con la cual la primera informa sobre el presunto trato inadecuado que el licenciado Marco Julio Iraheta Hernández, Gerente Legal del MOPTVDU, brindaría a sus subalternos (fs. 107 y 108).

3. Copias simples de testimonios de poderes generales judiciales con clausulas especiales otorgados por el Ministro de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano los días cinco de junio de dos mil catorce y veinte de mayo de dos mil quince, a favor del licenciado Marco Julio Iraheta Hernández y otros abogados (fs. 116 al 123).

4. Impresión del artículo noticioso denominado “Órgano judicial en mora” [sic], publicado el día uno de junio de dos mil siete en el medio digital “ComUnica en línea” (f. 124).

5. Copias simples de los correos electrónicos suscritos por las señoras Loyda Marielos Alfaro Chévez y Tania Patricia Chávez López en fechas veintisiete de febrero, tres y dieciséis de junio, quince y diecisiete de julio de dos mil catorce, relativos a: a) la resolución de procedimientos sometidos a conocimiento de la CSC del MOPTVDU vinculados con los señores

y los de referencias 07-DP-13, 01-SSGS-14, 01-DP-12 (fs. 187, 206, 208, 210 y 211); y b) la suplencia del señor Pedro Faustino en ausencia de la señora Alfaro Chévez en el mes de julio de dos mil catorce (f. 212).

d) Valoración de la prueba y decisión del caso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 inciso 5° de la Ley de Ética Gubernamental, en lo sucesivo LEG, las pruebas vertidas en el procedimiento se valorarán según el sistema de la sana crítica, el cual se asienta en el principio de razonabilidad y obliga a que las máximas de experiencia consten en la motivación de la resolución definitiva; a fin de evidenciar cómo se ha alcanzado certeza de lo afirmado por las partes.

Con la prueba recabada en el presente procedimiento, se acreditó que:

Entre los años mil trece y dos mil quince los señores Marco Julio Iraheta Hernández, Loyda Marielos Alfaro Chévez y Tania Patricia Chávez López integraron la CSC del MOPTVDU, según consta en copia certificada por la Presidenta de la citada Comisión, del acta de toma de posesión de los aludidos servidores públicos como miembros de ese ente colegiado, elaborada a las ocho horas del día tres de abril de dos mil catorce (fs. 155 al 159).

Entre el veintisiete de mayo de dos mil trece y el trece de agosto de dos mil quince la citada Comisión tramitó el procedimiento de despido contra el señor denunciante en el presente procedimiento, clasificado con la referencia 1-DP-2013. Es decir que esas diligencias se resolvieron en un total de dos años con dos meses y dieciséis días, como se verifica en copias simples de los pasajes de ese procedimiento (fs. 13 al 16, 21, 23 al 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38 al 44, 46, 52 al 65, 67 al 72, 74, 76 al 87); y en el cuadro que detalla las diligencias realizadas en ese caso, anexo al informe remitido por los miembros de la CSC del MOPTVDU el día veintidós de agosto de dos mil dieciséis (fs. 153 y 154).

Conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Servicio Civil (LSC), en los procedimientos de despido, al comunicarse a determinada CSC la decisión de una autoridad

de despedir a un funcionario o empleado público, ese órgano colegiado debe notificar al posible afectado con dicho acto en los siguientes *tres días*, a efecto de que este último manifieste sus argumentos de oposición y proponga pruebas de descargo.

Si dentro del plazo señalado el servidor público a quien se pretende despedir expresa su oposición, la CSC debe instruir un informativo con la intervención del primero y de la autoridad solicitante del despido, procedimiento en el cual se recibirán las pruebas que propongan esos actores y las que esa misma Comisión estime necesario producir, “(...) *dentro del término improrrogable de ocho días, vencidos los cuales pronunciará resolución confirmando o revocando la decisión de (...) despido*”

Trasladando los plazos previstos en esa disposición al caso particular, es evidente que el trámite del procedimiento 1-DP-2013, considerado en su totalidad, se prolongó más allá de lo previsto en la LSC y, por tanto, existió un retardo. Asimismo, al trazar una cronología de las diligencias efectuadas por la CSC del MOPTVDU para instruirlo, resultan patentes los períodos de inactividad que median entre cada decisión de ese cuerpo colegiado.

Ahora bien, la mera vinculación de los investigados con esa dilación –por ser ellos los encargados del trámite indicado– resulta insuficiente para establecer la conducta proscrita en el artículo 6 letra i) de la LEG, pues uno de los elementos constitutivos de ese tipo es precisamente *que el retardo no devenga de un motivo legal*, lo cual no fue posible acreditar en el presente caso, ni por parte del conjunto de investigados ni de alguno de ellos en particular.

Por el contrario, se determinó que en el período examinado –es decir, entre el veintisiete de mayo de dos mil trece y el trece de agosto de dos mil quince–, los investigados realizaron diversas gestiones a efecto de diligenciar el procedimiento 1-DP-2013, entre otros trámites sometidos a su conocimiento, como el desarrollo de reuniones de trabajo para analizarlo y discutir los proyectos de resolución elaborados, según se constata en las impresiones de los diversos correos electrónicos enviados entre los miembros de la CSC del MOPTVDU, entre las fechas indicadas, convocando a las aludidas reuniones (fs. 98, 99, 102, 104 al 106, 181 al 186, 188, 190, 191, 193 al 199, 202 al 205, 207, 209, 213, y 215 al 217).

Asimismo, consta en el expediente que los señores Marco Julio Iraheta Hernández, Loyda Marielos Alfaro Chévez y Tania Patricia Chávez López desarrollaron las anteriores actividades en paralelo al ejercicio de las funciones correspondientes a sus cargos de Gerente Legal, Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica y Colaborador Jurídico en el MOPTVDU, respectivamente, para los cuales fueron contratados en esa institución, como se verifica en los informes que detallan las funciones ejecutadas por los citados señores en el MOPTVDU, entre los años dos mil trece y dos mil quince, suscritos por el Viceministro de Transporte y el Gerente de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional del aludido Ministerio (fs. 131 al 133, 160 al 164, 178 y 179); en copias certificadas por el referido Gerente de los descriptores de los puestos relacionados y sus funciones (fs. 166 al 177); y en copias simples

constan las funciones de la Gerencia Legal y de la Unidad de Asesoría Técnica de la misma institución (fs. 125 y 134 al 137).

Adicionalmente, se estableció que en el período investigado la CSC del referido Ministerio careció de personal que le apoyara en el desarrollo de sus funciones, según consta en el memorando referencia MOP-GDTH-UDA/1057-08-2016 de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por el Gerente de Desarrollo del Talento Humano del MOPTVDU (f. 165).

Por otro lado, con el memorando referencia MOP-GA-1260/08/2016 de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por la Gerente Administrativo Institucional del MOPTVDU (f. 180), se acreditó que entre mayo de dos mil trece y agosto de dos mil quince la CSC del MOPTVDU no dispuso de un espacio físico propio para sesionar y estudiar en conjunto los casos que les correspondía tramitar, sino que únicamente pudo utilizar para esos efectos la sala de reuniones de la Gerencia Legal del MOP, en horarios específicos.

En ese sentido, en el entorno laboral en el cual los investigados debían cumplir con sus obligaciones como miembros de la CSC del MOPTVDU, concurrieron circunstancias que propiciaron el retardo en el trámite de las diligencias relacionadas, como las indicadas sobre el desarrollo simultáneo de las funciones correspondientes a los cargos para los cuales fueron contratados en el aludido Ministerio, la falta de personal que apoyase la gestión de dicha Comisión y de un espacio físico permanentemente disponible para que ese cuerpo colegiado se reuniera a estudiar los casos sometidos a su conocimiento y, en consecuencia dictara las decisiones correspondientes en cada uno de ellos.

La concomitancia de las circunstancias descritas justifica desde la perspectiva ética la dilación en el trámite del procedimiento 1-DP-2013, pues con ellas se configuró un impedimento material para atenderlo en los plazos establecidos por la Ley de Servicio Civil. En similar sentido se pronunció este Tribunal en la resolución del 13/4/2016, en el procedimiento referencia 114-D-12.

En ese sentido, si bien la prueba recabada genera la convicción acerca de la existencia del retardo invocado en la denuncia, no permite atribuir responsabilidad por el mismo a uno o varios de los miembros que integraron la CSC del MOPTVDU, en el período investigado.

Y es que de conformidad con el principio de culpabilidad, –aplicable tanto en el Derecho Penal como en el Derecho Administrativo Sancionador–, para la imposición de una sanción por infracción de un precepto administrativo, es indispensable que el sujeto haya obrado dolosa o cuando menos culposamente, es decir, que la transgresión a la norma haya sido querida o se deba a imprudencia o negligencia del sujeto, quedando excluido cualquier parámetro de responsabilidad objetiva en la relación del administrado frente a la Administración, pues ésta, para ejercer válidamente la potestad sancionatoria, requiere que la

contravención al ordenamiento jurídico haya sido determinada por el elemento subjetivo en la conducta del administrado (Resolución del 5/2/2018, ref. 30-D-15).

Ahora bien, es necesario aclarar que el tener por establecidas las anteriores condiciones justificativas del retardo en el trámite del procedimiento 1-DP-2013 no implica el desconocimiento o la aceptación por parte de este Tribunal de las posibles lesiones generadas en los derechos del señor _____, las cuales, en todo caso, deben dilucidarse en el proceso judicial correspondiente; sino que, al margen de ello, conduce indefectiblemente a excluir de responsabilidad a los investigados en los hechos atribuidos en esta sede.

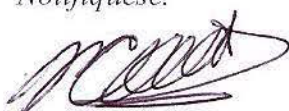
Asimismo, es dable precisar que el reconocimiento de las responsabilidades laborales que los investigados debieron atender en paralelo a las de miembros de la CSC del MOPTVDU y de la insuficiencia de recurso humano para el expedito diligenciamiento de los casos sometidos a su conocimiento, no obsta para que los funcionarios que integran ese cuerpo colegiado, en lo sucesivo, implementen medidas administrativas suficientes para agilizar el trámite de los procedimientos que les corresponde diligenciar y evitar retardos en menoscabo de los derechos de los interesados en los mismos, así como del desempeño ético de la función pública, pues en caso contrario, las dilaciones generadas y reiteradas serán inexcusables ante esta sede.

En definitiva, entonces, según se ha detallado en la presente resolución, con el análisis de los elementos probatorios incorporados al procedimiento no se ha establecido que los servidores públicos investigados hayan transgredido la prohibición ética regulada en el artículo 6 letra i) de la Ley de Ética Gubernamental.

Por tanto, con base en los artículos 1 de la Constitución, III.1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 1 letra c) y 8. 1 y 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 6 letra i), 37 de la Ley de Ética Gubernamental y 99 del Reglamento de dicha Ley, este Tribunal **RESUELVE:**

Absuélvese a los señores Marco Julio Iraheta Hernández, Loyda Marielos Alfaro Chévez y Tania Patricia Chávez López, Miembros de la Comisión de Servicio Civil del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, a quienes se atribuyó la transgresión a la prohibición ética regulada en el artículo 6 letra i) de la Ley de Ética Gubernamental.

Notifíquese.



PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL QUE LO SUSCRIBEN

Co4

